

plaza pública para la edición del 20 de octubre de 1992  
% San Luis Potosí  
% Oposición reunida  
miguel àngel granados chapa

Si no fuera tema tan grave, se podría plantear en tono humorístico, la *solución potosina* a los problemas de selección priísta de candidatos para gobernador: Ya lo fueron tres de los aspirantes (Fausto Zapata, Gonzalo Martínez Corbalà y Teòfilo Torres Corzo). Mediante la socorrida vía de los interinatos, en 1993 podría ocupar el palacio de gobierno (o al menos pretender entrar a èl) Fernando Silva Nieto, en 94 Carlos Jiménez Macías y cerraría con broche de oro el periodo, don Jesùs Silva-Herzog Flores. De ese modo, todos en el PRI quedarían contentos. Otra modalidad de la misma solución consistiría en predicar a los muchos interinos (el panista de Guanajuato incluido): ¡Gobierne bien y quèdese en su cargo toda la vida!.

Pero el asunto es serio como para tomarlo a broma. La decisión de Martínez Corbalà --o admitida por èl, que en marzo se manifestaba renuente a aceptarla-- de salir del gobierno altera de nuevo las condiciones de vida en San Luis Potosí. Quede clara la gènesis de la situación: son las decisiones priístas la causa de las reacciones ciudadanas, por lo que la factura por la exasperación que èstas puedan causar a los ciudadanos menos preocupados por lo que pasa en su tierra, deben ser endosadas al gobierno, y no achacadas a quienes no hacen màs que resistirlas.

Irse ~~provisionalmente~~ Martínez Corbalà y ser designado interino interino Torres Corzo, fueron acciones que tuvieron un efecto fulminante, y por entero contrario a las previsiones y deseos del priísmo: la oposición fue de nuevo alertada, alentada y unificada. Esta última consecuencia es de especial importancia, porque modifica un cuadro que era favorable a los intereses gubernamentales.

Luego de la insólita coalición para sostener la candidatura del doctor Salvador Nava, los partidos coaligados se separaron. Fue notoria la distancia abierta a fines del año pasado, con motivo de las elecciones municipales, entre el PAN y el propio doctor Nava, al frente del Frente Cívico. La muerte del líder potosino enfrió aun más las relaciones, que se congelaron durante el proceso de discusión de nueva ley electoral. Uno de los intereses básicos del Frente, la apertura a las candidaturas independientes, no quedó recogido en la ley, y el PAN no se afanò demasiado en apoyar la petición. No llegaron al antagonismo pero sí al recelo esas dos fuerzas antaño hermanadas y aun fundidas.

Hoy lo están de nuevo, y no sólo en el nivel local. Doña Conchita Calvillo, que ha recogido el legado político de su marido el doctor Nava, tuvo a su lado a la secretaria general



Jorge Victor Mahbub y Fructuoso Lopez  
Cárdenas,

del comité nacional panista, Cecilia Romero, en la conferencia de prensa ofrecida la semana pasada, que versó acerca de la violencia promovida por el nuevo interino (o interino interino, o interino II, o reinterino).

Porción vital de la herencia navista es la convergencia partidaria, buscada incesantemente por el doctor Nava. A su muerte, esa iniciativa quedó en peligro de zozobrar y ahora navega de nuevo. Y no es retórica solamente, puesto que uno de sus principales pilares (el otro es, indisputablemente, el Frente Cívico), el panismo, se ha colocado en una delicada línea, de alto riesgo. Mario Leal Campos, su dirigente natural en San Luis y alcalde de la capital, así como los dos diputados federales panistas correspondientes a esa circunscripción, se lanzaron de modo inequívoco contra el interino interino.

Su posición puede ser jurídicamente discutible (en el estricto sentido de la expresión, es decir, que sobre ella puede haber diversas opiniones valederas), pero es políticamente impecable, porque corresponde al sentir de un vasto sector de la población. Y ya se sabe que cuando la gente dice al mediodía que es de noche, los políticos tienen que encender los faroles. Tan valiosa y valiente es la postura del ayuntamiento potosino, que de inmediato se organizó una ridícula andanada en su contra. Cincuenta y tres de los 56 gobiernos municipales pidieron que se siga juicio político contra Leal Campos, por haber desconocido al gobernador Torres Corzo. Buena parte de los alcaldes firmantes llegaron a sus cargos en posición legal y políticamente precaria, por lo que carecen de autoridad moral para enjuiciar a su colega. Pero aunque fueran

estuvieran libres de culpa, todo el mundo sabe cómo se organizan tales ataques.



20-oct-92

# PLAZA PUBLICA

Miguel Angel Granados Chapa

San Luis Potosí

Oposición reunida

**S**i no fuera tema tan grave, se podría plantear en tono humorístico la solución potosina a los problemas de selección priísta de candidatos para gobernador: Ya lo fueron tres de los aspirantes (Fausto Zapata, Gonzalo Martínez Corbalá y Teófilo Torres Corzo). Mediante la socorrida vía de los interinatos, en 1993 podría ocupar el

palacio de gobierno (o al menos pretender entrar a él) Fernando Silva Nieto, en 94 Carlos Jiménez Macías, luego Víctor Mahbub y Fructuoso López Cárdenas, y cerraría con broche de oro el periodo don Jesús Silva-Herzog Flores. De ese modo, todos en el PRI quedarían contentos. Otra modalidad de la misma solución consistiría en predicar a los muchos interinos (el panista de Guanajuato incluido): ¡Gobierne bien y quédese en su cargo toda la vida!

Pero el asunto es serio como para tomarlo a broma. La decisión de Martínez Corbalá —o admitida por él, que en marzo se manifestaba renuente a aceptarla— de salir del gobierno alteró de nuevo las condiciones de vida en San Luis Potosí. Quede clara la génesis de la situación: son las decisiones priístas la causa de las reacciones ciudadanas, por lo que la factura por la exasperación que éstas puedan causar a los ciudadanos menos preocupados por lo que pasa en su

tierra, deben ser endosadas al gobierno, y no achacadas a quienes no hacen más que resistirlas.

Irse Martínez Corbalá y ser designado interino interino Torres Corzo, fueron acciones que tuvieron un efecto fulminante, y por entero contrario a las previsiones y deseos del priísmo: la oposición fue de nuevo alertada, alentada y unificada. Esta última consecuencia es de especial importancia, porque modifica un cuadro que era favorable a los intereses gubernamentales.

Luego de la insólita coalición para sostener la candidatura del doctor Salvador Nava, los partidos coaligados se separaron. Fue notoria la distancia abierta a fines del año pasado, con motivo de las elecciones municipales, entre el PAN y el propio doctor Nava, al frente del Frente Cívico. La muerte del líder potosino enfrió aún más las relaciones, que se congelaron durante el proceso de discusión de la nueva ley electoral. Uno de los intereses básicos del Frente, la apertura a las candidaturas independientes, no quedó

recogido en la ley, y el PAN no se afanó demasiado en apoyar la petición. No llegaron al antagonismo pero sí al recelo esas dos fuerzas antaño hermanadas y aun fundidas.

Hoy lo están de nuevo, y no sólo en el nivel local. Doña Conchita Calvillo, que ha recogido el legado político de su marido el doctor Nava, tuvo a su lado a la secretaria general del comité nacional panista, Cecilia Romero, en la conferencia de prensa ofrecida la semana pasada, que versó acerca de la violencia promovida por el nuevo interino (o interino interino, o interino II, o reinterino).

Porción vital de la herencia navista es la convergencia partidaria, buscada incessantemente por el doctor Nava. A su muerte, esa iniciativa quedó en peligro de zozobrar y ahora navega de nuevo. Y no es retórica solamente, puesto que uno de sus principales pilares (el otro es, indisputablemente, el Frente Cívico), el panismo, se ha colocado en una delicada línea, de alto riesgo. Mario Leal Campos, su dirigente natural en San Luis y alcalde de la capital, así como los dos

diputados federales panistas correspondientes a esa circunscripción, se lanzaron de modo inequívoco contra el interino interino.

Su posición puede ser jurídicamente discutible (en el estricto sentido de la expresión, es decir, que sobre ella puede haber diversas opiniones valederas), pero es políticamente impecable porque corresponde al sentir de un vasto sector de la población. Y ya se sabe que cuando la gente dice al mediodía que es de noche, los políticos tienen que encender los faroles. Tan valiosa y valiente es la postura del ayuntamiento potosino, que de inmediato se organizó una ridícula andanada en su contra. Cincuenta y tres de los 56 gobiernos municipales pidieron que se siga juicio político contra Leal Campos, por haber desconocido al gobernador Torres Corzo. Buena parte de los alcaldes firmantes llegaron a sus cargos en posición legal y políticamente precaria, por lo que carecen de autoridad moral para enjuiciar a su colega. Pero aunque estuvieran libres de culpa, todo el mundo sabe cómo se organizan tales ataques.